

EXAMEN UNICO RECLAMOS Y PERSPECTIVAS

CARLOS ORNELAS

El ya célebre examen único o concurso de selección a la educación media de la zona metropolitana de la ciudad de México puso de nuevo a la política educativa en las primeras planas. Las gráficas que muestran a jóvenes con sus padres protestando señalan que hay algo que aparentemente está mal con dicho examen. Sus críticos acusan a las autoridades de la SEP y de las nueve instituciones públicas de enseñanza media, de utilizar el concurso para, entre otras cosas, asignar a estudiantes a escuelas técnicas a las que no desean asistir, clausurar las áreas humanísticas, frustrar a jóvenes deseosos de estudiar una carrera profesional con el propósito de apoyar el desarrollo del país y para otros fines perversos. La conclusión, señalan, será que mediante éste y otros exámenes se segmentará la educación media de acuerdo con el origen de clase social y se reproducirá la brecha entre pobres y ricos. Por el contrario, para las autoridades, dicha prueba se instrumentó con el fin de auxiliar a las instituciones que ofrecen educación media en la selección de los solicitantes de sus servicios, facilitar los procesos de información a los jóvenes estudiantes, conocer la demanda real por institución y, se espera, que también sirva como una herramienta de planeación.

Más allá de fobias y ponderaciones, es conveniente analizar los antecedentes y consecuencias del examen desde una perspectiva democrática y equitativa, con el fin de proponer opciones para el futuro.

Antecedentes

Quizá la consecuencia más importante del movimiento de los excluidos de la UNAM del año pasado es que previno a las autoridades acerca del polvorín que era ese proceso de selección que no brindaba mayor información a los estudiantes acerca de otras opiniones. Parece que nadie sensato desea que la Universidad Nacional o el Instituto Politécnico Nacional crezcan más y agraven sus problemas. Ese movimiento acaso aceleró la decisión de implantar el concurso de selección, pero no lo determinó. Desde el Programa para la Modernización Educativa: 1989-1994, se anunciaba que la evaluación sería el eje de la política hacia la educación media y superior. Evaluar procesos e instituciones, la enseñanza y el aprendizaje, eran la consigna que concretó de diversas maneras. Se crearon instituciones como la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, con el fin de promover esa política y monitorear sus resultados. Ya casi para finalizar el gobierno de Carlos Salinas, se constituyó el Ceneval o Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, con el objetivo de preparar exámenes de ingreso a la licenciatura y la enseñanza media, así como para, en conjunto con asociaciones de profesionales, comenzar los procesos de acreditación de las profesiones. A esa asociación civil se le encomendó la realización del examen único.

Los resultados del primer examen son bien conocidos: a partir del 2 de agosto las cifras están en la prensa y los noticiarios que surcan el aire: 260 mil solicitantes, 231 mil aceptados —los 29 mil de diferencia son resultado de que no concluyeron su secundaria—; de los que ingresaron, el 57% lo hicieron en la escuela de su primera opción, y más del 70%, en su segunda. El Ceneval reconoció que tal vez hubo errores en la asignación y se mostró dispuesto a enmendar lo corregible. El gobierno se había comprometido a que no habría rechazados y se amplió la oferta a 50 mil lugares más que el año anterior en seis de las nueve instituciones. El 5 de agosto se publicaron los cortes y número de solicitantes por institución y, sin embargo, hubo protestas de quienes no fueron aceptados; los medios también dieron cabida al 90% que se inscribió sin problemas. Pienso que lo novedoso hubiera sido que nadie reclamara. En un examen de esta naturaleza siempre habrá desplazados, errores y personas dispuestas a asumir la defensa de quienes no pueden ingresar.

Decepción y protestas

Dos efectos desagradables del concurso de selección eran predecibles: desencanto de quienes no entraron a su primera, segunda o tercera opciones, y desaprobaciones de quienes de antemano se oponían al examen único. Otros aplaudieron la realización del examen pero critican que no excluya a quienes obtienen puntajes bajos.

Se entiende que jóvenes que habían cifrado esperanzas en obtener un lugar en una escuela y no lo alcanzaron, estén decepcionados, así como sus padres, quienes tal vez tenían más ilusiones que los mismos hijos. El concurso finalmente es un examen y hay quienes sacan mejores calificaciones que otros y es difícil aceptar —en especial para padres sobreprotectores— que sus hijos sean desplazados. Para algunos de esos jóvenes la culpa de su fracaso relativo es exclusivamente del examen, no de ellos; no de su escasa preparación ni de sus bajas calificaciones; para otros, la culpa es de sus maestros de secundaria que no les enseñaron lo que les iban a preguntar. Unos cuantos aceptan que no estuvieron a la altura, y aunque eso no alivia su decepción, están buscando espacio en una escuela particular.

Entre quienes reprochan que se instaurara el examen único y que no son los directamente afectados, se pueden distinguir dos bandos que, a pesar de adscribirse a doctrinas distintas, se identifican con la defensa de lo existente. Por un lado, se encuentran quienes defienden posiciones burocráticas, representan la estabilidad y la tradición del sistema educativo y que en consecuencia, desconfían de cualquier cambio que signifique alteración de sus rutinas y de lo que en el pasado funcionó, aunque nunca hubiera sido eficaz. Aquí tal vez cabrían aquellos que protegen sus empleos en el sector educativo pero que no registran ningún interés por la educación nacional ni por los jóvenes.

La historia de los opositores por sistema es diferente. Para ellos el examen único es una maniobra más del gobierno para desamparar a los pobres, para hacer elitista la educación media y superior, todo con el fin aparente de fortalecer el neoliberalismo, privatizar la educación pública y cerrar las puertas a la movilidad social. Para los opositores la solución es que el examen y el concurso de selección se eliminen; es más, aseguran que ese

procedimiento nunca se debió implantar. Su demanda central es que la educación media sea abierta a todos los solicitantes en la escuela de su preferencia con el único requisito de haber aprobado el ciclo anterior. Por supuesto que también se oponen a que las instituciones realicen su propio examen de admisión y abogan porque la UNAM y el IPN amplíen su capacidad instalada para dar cabida a todos los demandantes de educación media; arguyen que esas instituciones deben cumplir con su responsabilidad social. Esta corriente populista —uso el término sin sentido peyorativo— persigue crear una alianza amplia de opositores que se articularía con otras demandas a fin de presentar un frente unido, con plan de acción y líneas programáticas que les permita tomar o mejorar sus posiciones dentro del sector educativo.

En esa alianza participan los dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario, segmentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y académicos que militan en la izquierda universitaria. Ellos se dispensaron el derecho de defender a quienes no alcanzaran un lugar y se echaron a cuestras el trabajo de organizar la protesta. Desde que apareció la convocatoria al examen único comenzaron a mostrar su inconformidad y algunos de ellos solicitaban que se les consultara, así como que se le preguntara a prácticamente todo el mundo si era o no conveniente implantar el concurso. Su estrategia parece bien estructurada. En varias entrevistas de radio y televisión algunos de sus voceros han señalado que en un oficio entregado a la SEP demandaban ser tomados en cuenta, denunciaban 18 violaciones a la ley y hacían otras notificaciones. Para el domingo 4 de agosto ya habían interpuesto una demanda ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya elaboración y justificación hace suponer que ya estaba preparada de antemano y se habían estudiado con cierto cuidado los argumentos. No tengo copia del documento que se envió a la SEP; sin embargo, me figuro que allí encontraron respuesta, aunque —también me lo imagino— esa réplica no les satisfizo. Supongo que la CNDH ratificará las tesis del año pasado donde se asienta el derecho a estudiar educación media a quienes satisfagan los requisitos legales e institucionales; uno de ellos, este año, es el examen único.

Una de las cuestiones que los opositores critican es que el examen lo realice el Ceneval, asociación civil en la que participan varias universidades y la misma ANUIES. El Ceneval está financiado todavía por el gobierno pero con miras a la independencia económica. Es una ironía que los adversarios del gobierno se quejen de que un organismo civil —privado, arguyen— tenga información oficial que ellos suponen no debe tener y al mismo tiempo pidan las mismas referencias. La paradoja es mayor ya que en algunos foros los mismos opositores aparecen como fanáticos de la sociedad civil, pero en este caso concreto critican al gobierno por transferir esa tarea a una institución que bien podría catalogarse como un organismo no gubernamental o un órgano de la sociedad civil; lo cual me hace suponer que en su visión hay varias sociedades civiles y se apela sólo a aquella que se amolda mejor a sus preferencias.

En el extremo contrario, sectores de clase media expresan sus críticas al examen en un tono vociferante, especialmente ciertos conductores de la radio. Cuando se anunció la realización del concurso de selección tal vez pensaron que serviría también para excluir a quienes no alcanzaran cierto puntaje o fueran reprobados en la escala clásica del cero al 10; pensaban que se debía depurar a las escuelas de malos elementos, vagos y fósiles y que el

concurso sería un tamiz para ello. Cuando el gobierno aseguró que todos los que presentaran el examen y cumplieran los otros requisitos, aunque tuvieran un puntaje bajo serían aceptados, esos segmentos protestaron también. Les parece que las razones del gobierno de no excluir, de que no haya rechazados, es una posición populista y que no premia a quienes se esfuerzan por estudiar, aprender y competir.

Pese a que algunos esperaban que el examen sirviera de instrumento de cierto darwinismo social, estoy convencido de que en el futuro sí habrá reprobados, aunque el gobierno buscará otras alternativas de estudio o formas de capacitación para el trabajo. En esta primera experiencia no se deseaba que alguien cargara con el sambenito de rechazar o excluir incluso a quienes no desean estudiar, y dejaron en blanco su examen para no ofrecer más motivos de protesta a los sectores populistas. El mensaje que se está enviando a jóvenes y padres de familia es que en el futuro entrar a la escuela será más difícil y, por lo tanto, habrá que esforzarse más.

Al momento de concluir esta nota -6 de agosto por la tarde— no son seguras las perspectivas para la movilización en contra del examen único. Quienes promueven la protesta han trabajado duro, hay inconformes —quienes no fueron seleccionados a una opción de su preferencia—, errores en la instrumentación que se pueden explotar, argumentos que se pueden exagerar y, sobre todo, otras coyunturas en la UNAM con las que se pueden articular como los rechazados a la licenciatura, la reforma del Colegio de Ciencias y Humanidades y la grilla por el cambio de rector al final del año. A pesar de eso, me atrevo a pronosticar que no habrá una movilización considerable ni serán capaces de echar para abajo el examen único, aunque tal vez pretendan tomar la rectoría como el año pasado o sitiar el edificio de la SEP como lo hizo la CNTE en mayo pasado. Tampoco los del otro extremo conseguirán que se retiren las ofertas de estudio hasta para aquellos que sacaron un cero. En esta ocasión el gobierno, el Ceneval y las mismas instituciones se están aplicando para desarticular las protestas.

Contraofensiva: previsión y atención a los inconformes

Si se revisan las cifras presentadas en el Programa de Desarrollo Educativo: 1995-2000, se encontrará que el gobierno ya había previsto la expansión de la demanda en la educación media, tanto por los incrementos en la matrícula de educación básica, como por la mejoría de los índices de eficiencia terminal de primaria y secundaria. Asimismo, tiene contemplados pronósticos de crecimiento para los próximos años y, supongo, el examen es uno de los elementos de su estrategia para regular el tránsito a la educación superior, que se espera crecerá en más de 400 mil alumnos de aquí al año 2000. En esas expectativas se apoya mi intuición para porfiar que no se cancelará el examen; es más, pienso que para el año 2000 será nacional y no sólo de la zona metropolitana.

Uno de los elementos que ayudará a desarticular la protesta de estos días es el de que más de 150 mil jóvenes encontraron lugar en una de sus dos primeras opciones. Ciertamente, ellos no se manifiestan, ni hacen bulla para convertirse en noticia, pero se inscriben en su institución y así legitiman al concurso y si es necesario, pienso, de alguna manera defenderán su lugar ganado. Otro instrumento que ayudará a desactivar la protesta es la amplia información que

el Ceneval proporciona a los medios. En los últimos días de julio y los primeros de agosto, Antonio Gago —director del Ceneval— era visitante frecuente de las primeras páginas y de los noticieros de mayor auditorio. No obstante que es lento y costoso, el Ceneval brinda atención a cada uno de los solicitantes inconformes, busca permutas que les permitan lidiar con algunos casos, reconoce errores cuando los hubo, amplía los plazos y, aun en sábados y domingos, su personal platica con padres de familia y alumnos por más de media hora por caso, y cuando hay solución la ofrece.

El elemento más importante para restarles membresía a los activistas que se oponen al examen es, a mi juicio, las casi 20 mil becas de colegiatura ofrecidas por la UNAM y el IPN en sus preparatorias incorporadas. Quienes acepten éstas, es previsible que dejarán de protestar y además abrirán algunos espacios en planteles que se podrán prometer a quienes no aceptan una opción por cuestiones de domicilio. Sin embargo, si bien la información, la atención personalizada y las becas tal vez resuelvan la coyuntura del verano de 1996, no podrán ser la solución a mediano plazo. Con el fin de fortalecer un proyecto de educación democrático y equitativo, se necesita estudiar más a fondo esta experiencia, mejorar los instrumentos de evaluación, incrementar y fortalecer los servicios de orientación vocacional y elevar la calidad de la educación básica para un mayor número de mexicanos.

La contribución de los exámenes nacionales a la calidad y equidad en la educación

Algunas de las críticas que se hacen a los exámenes estandarizados, al observar sus consecuencias en algunos países, son pertinentes para el futuro y no se deben desechar. Es importante vigilar no caer en los extremos: no tener nada para evaluar el sistema o apoyarse exclusivamente en los exámenes uniformes. En el texto de la Ley General de Educación de 1993 hay una invitación a que la sociedad participe en la educación, pero la convocatoria no se ha concretado. Una de las explicaciones de esa ausencia es la falta de actividades sustantivas a los Consejos de Participación Social. Quizás una de las tareas que se les podría transferir a estos consejos —que donde se han formado son cascarones— es una evaluación global del sistema en donde instituciones como el Ceneval, y otras más que se podrían crear, se hicieran cargo de practicar evaluaciones nacionales tanto de los resultados educativos como de los procesos.

Estos exámenes pueden ser generales y el mismo día para todos; además de medir la calidad de cada escuela tienen efectos igualitarios al establecer las mismas reglas claras y conocidas por todos con anterioridad. Como es bien sabido, la calidad de las escuelas también es una escala de clase social, etnia o región; los exámenes, en consecuencia, también deberían servir como instrumentos de las autoridades para asignar más fondos a regiones y sectores sociales pobres que enfrentan con desventaja competencias como los concursos de admisión o las evaluaciones periódicas estandarizadas.

No obstante, hay una exigencia que se debe cumplir. El gobierno y las instituciones están obligados —los resultados conocidos del examen único así lo indican— a mejorar y ampliar los servicios de orientación vocacional y de información escolar. En abril y mayo de 1996, por primera vez en la historia reciente de la educación en México, todos los alumnos de tercero de secundaria tuvieron información acerca de las opciones de estudio en

su área. Estuvo bien como medida emergente, mas en el futuro inmediato eso se debe profundizar. Se tienen que elaborar programas nuevos, resumir la información y presentarla en forma atractiva. Sé que hay orientadores profesionales competentes y motivados para hacer estas tareas. La orientación vocacional estuvo relegada a segundo plano por mucho tiempo. Es una profesión noble y necesaria que con el proyecto democrático y equitativo se revalora y cobra mayor importancia con los exámenes nacionales.

Conclusión

Mirándolo en perspectiva histórica, el examen único generó protestas, marchas y movilizaciones pero quizás hubiera sido peor sin él. Estoy convencido de que la SEP hizo bien en agarrar al toro por los cuernos, si este año ha habido problemas, para 1997 los impedimentos hubieran sido mayores pues además será un año de elecciones cruciales. Los argumentos de que con el examen se segmentará la educación media no me convencen; ya está segmentada. Tampoco creo que haya una conspiración en contra de las humanidades o las profesiones liberales. Si vigilamos su desempeño en el futuro, si se mejoran los instrumentos y hay una mayor participación social, puede en cambio aliviar —parcialmente por supuesto— esa segmentación. Además, si se mandan los mensajes correctos a los estudiantes, los maestros y los padres de familia, si el gobierno sigue haciendo su tarea y se mejoran planes, programas y la formación de los docentes, si el examen es parte de una estrategia global, entonces hasta tiene el potencial de contribuir a elevar la calidad de la educación, asunto deseable para el proyecto democrático y equitativo.

Hay una trama que no pude tratar porque no sé por dónde abordarla sin lastimar ciertos sentimientos o dar una impresión errónea. Asumo que puedo estar equivocado, mas no procedo de mala fe. Quienes protestan con motivo propio y quienes se arrogan su protección, presumen que todos los jóvenes que presentaron el examen están deseosos de estudiar, de prepararse para servir a la patria y de convertirse en ciudadanos ejemplares. Tal vez parte de esto sea cierto para unos; sin embargo, algunos no se prepararon bien para el examen y otros ni siquiera lo contestaron. En 1988 hice una encuesta entre jóvenes estudiantes de tres universidades públicas y encontré que los motivos que los impulsaron a estudiar fueron, primero, por la expectativa de encontrar un mejor empleo; segundo, por prestigio social y tercero, por ayudar a sus familias. Incluso algunos estudiaban su carrera por presión de la parentela. Sólo unos cuantos mencionaron que lo hacían para apoyar el desarrollo del país y únicamente dos señalaron que por aprender algo útil para la vida, uno de ellos estudiaba literatura. Esas razones para buscar un lugar donde estudiar son legítimas, pero por alguna causa no las mencionan quienes protestan y quienes los representan; nos quieren hacer creer que todos los que no alcanzaron un buen puntaje —y hasta los que reprobaron alguna materia de tercero de secundaria— están genuinamente motivados para servir al país y ser ciudadanos ejemplares. En el futuro, pienso, tendrán que demostrar esas cualidades estudiando más y haciendo esfuerzos superiores, hasta sacrificios, no marchando por las calles ni echando la culpa a otros por sus desgracias.